

Capítulo 3

La política africana de España (2006-2011)*

El Plan África, cinco años después

En la primavera de 2006, convenientemente sugestionados por la televisada avalancha de cayucos que amenazaba con colmar demográficamente las Islas Canarias, podíamos sentirnos tentados de pensar que lo que se estaba dirimiendo realmente en las aguas del océano –y en las costas africanas y europeas– era el control de los flujos migratorios. Una vez desintoxicados de la propaganda mediática, pudimos evidenciar que la militarización de la frontera exterior, así como las medidas destinadas a externalizar las fronteras, se estaban construyendo sobre una falsa invasión, puesto que la única verdadera invasión que recibe Canarias cada año –para jolgorio de empresarios y políticos– es la de millones de turistas.¹ Denunciamos entonces las consecuencias de las iniciativas militares y policiales de la UE y del Estado español en el océano; entre ellas, la multiplicación de la distancia que debían recorrer las embarcaciones de inmigrantes y, por tanto, el incremento de las muertes en el océano. Expresamos además nuestro desprecio por quienes, desde el gobierno español, habían desplegado al ejército a este lado de las vallas de Ceuta y Melilla, así como ordenado disparar a la policía española y marroquí contra los *asaltantes* de las mismas; y rechazamos la presencia de policías y militares españoles en el territorio africano, así como la financiación de centros de detención en países de origen o de tránsito

* Una primera versión de este capítulo fue publicada en mayo de 2011 en el libro *Si vis pacem. Repensar el antimilitarismo en la época de la guerra permanente*, pp. 122-134.

¹ Se trataba –en dicho año 2006– de 31.678 inmigrantes frente a más de nueve millones y medio de visitas turísticas.

de las rutas migratorias, como es el caso del centro de detención de Nouadhibou (Mauritania), financiado por el Ministerio del Interior español.

Afirmar, sin embargo, que el montaje político y mediático en torno a las hordas de millones de africanos que, aún a riesgo de su propia vida, ansiaban cruzar a Europa –esos condenados *okies* no tienen sensatez ni sentimiento, diría un personaje de Steinbeck; los sin papeles no son más que unos insensatos, actualizaría el discurso sindical español–, tenía menos que ver con la política migratoria que con otros oscuros intereses del capitalismo español y europeo en África podía sonar, hace un lustro, a teoría conspirativa sin fundamento. La aprobación del Plan África en mayo de 2006, y la *humanitaria* comparecencia pública de la entonces vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, anunciando los ímprobos esfuerzos que, a partir de ese momento, se comprometía a realizar el Gobierno de España contra la pobreza –evitando de ese modo que la desesperada población africana se viera tentada de embarcar hacia Europa–, abundaban, aparentemente, en la restricción del asunto a un problema de *gestión de flujos*, por usar una terminología tan aséptica como generalizada (o más bien generalizada por ser, precisamente, aséptica).

Quizás el Gobierno de España se sintió en aquel momento tan seguro de su propaganda que ni siquiera se preocupó de que la letra del famoso Plan se correspondiera con este repentino y sobrevenido interés por garantizar a los pueblos africanos un futuro en su propio territorio. Quizás, simplemente, el Gobierno de España consideró que nadie lo leería. O –y esto es probablemente lo que más se acerca a la verdad– al Gobierno de España le dio exactamente igual que se leyera y se denunciara, pues confiaba –acertadamente– en la marginalidad de dichas denuncias y en el apoyo mayoritario y genuinamente democrático de la población española a la defensa, con uñas y dientes, de *nuestra* modesta porción del pastel africano.

Cinco años después de la aprobación del primer Plan África (2006-2008), y una vez que a éste se le ha dado continuidad con una segunda parte (2009-2012), la exacerbación de la *carrera por África* de las principales potencias capitalistas, ha ido depositando numerosas evidencias de la instrumentalización del *problema de la inmigración* en la *frontera sur* de la Unión Europea, de su uso como excusa para intensificar el neocolonialismo. El primer Plan en absoluto lo ocultaba, aunque de esto no se hablara en rueda de prensa: uno de sus pilares era la defensa de la seguridad energética de España, con especial atención al Golfo de Guinea, y «las oportunidades de negocio en el sector de hidrocarburos para las empresas españolas». ² La comparecencia pública de los consejeros de las oficinas económicas y comerciales de España en Ghana, Senegal y Nigeria, anunciando –con motivo de la aprobación de la segunda parte del Plan– una *ofensiva diplomática* para reforzar la presencia empresarial española en el continente, elevaba el grado de obscenidad de la *política africana* de España.

En 2006 ya advertíamos de la ridícula grandilocuencia del discurso del gobierno español: «este Plan nos colocará como uno de los principales actores internacionales en África y en el mundo», decía la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Por ello contextualizábamos la *política africana* española en un marco condicionado estrechamente por la estrategia de Estados Unidos –a la que los países de la UE se han venido subordinando–.

En el año 2009 el Gobierno de España, ante la oposición que suscita la instalación de la sede del mando militar estadounidense unificado para África –el AFRICOM– en el propio continente africano, ofreció la base de Rota (Cádiz) como centro conjunto de operaciones de inteligencia de dicho mando militar. En el mes de octubre de 2011 el presidente Zapatero compartió una rueda de

² MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (2007, 2ª ed.): *Plan África 2006-2008*.

prensa con el Secretario General de la OTAN, Anders Rasmussen, en la sede de Bruselas de la Alianza, para anunciar el acuerdo por el que la base naval española acogerá permanentemente a cuatro destructores de la Armada estadounidense dotados del Sistema de Combate Aegis, un sistema de alerta temprana que forma parte del llamado escudo antimisiles, proyecto con el que España colabora desde hace más de una década.³ La llegada de nuevos buques de guerra y más de un millar de efectivos estadounidenses supone además la cooperación de Rota, como ya se venía anunciando, en tareas de apoyo al AFRICOM.⁴

La comparecencia pública de Zapatero junto al Secretario General de la OTAN y al Secretario de Defensa de Estados Unidos no debiera resultarnos sorprendente. Responde a la trayectoria de subordinación cada vez más clara a los deseos estadounidenses. Israel, Líbano, Iraq, Afganistán o Somalia son tan sólo algunos de los episodios más destacados del servilismo español: el entonces ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos visitaba a su homóloga israelí al mismo tiempo que Israel asesinaba a miles

³ «Pero la flexibilidad de Aegis le permite ser mucho más que un sistema de defensa antimisiles para convertirse en realidad en el paradigma estratégico de la guerra naval en los próximos cincuenta años. El Secretario de Defensa Leon Panetta se ha encargado de recordarlo en la rueda de prensa de Bruselas. Su sistema de alerta temprana le capacita para iniciar de manera automática una respuesta defensiva ante el lanzamiento de cualquier misil contra una nave u objetivo, pero también le da una capacidad ofensiva preventiva contra bases de misiles fijas o móviles. De hecho, todas las marinas de la OTAN, además de las de Japón, Corea del Sur y Australia han reestructurado sus fuerzas navales dando la prioridad al sistema Aegis, cuyo control reside en sistemas de alerta temprana y de computación de EE UU. Independientemente de que se dote al sistema Aegis de misiles interceptores SM-2 o SM-3, los sistemas electrónicos integrados de todas las naves de guerra de nueva generación parten de la arquitectura de Aegis.» Ver G. BUSTER (2011): «Misiles en Rota: Zapatero y la guerra del siglo XXI.»

⁴ JUAN JOSÉ TÉLLEZ (2011): «Rota intercambia escudo antimisiles por empleo precario».

de palestinos en Gaza en enero de 2009; Tipi Livni expresaba entonces su satisfacción por la posición del gobierno español. Esa misma postura abiertamente proisraelí se había confirmado ya en 2006, con el envío de tropas españolas –más de mil soldados– al sur del Líbano, en una misión que pretendía debilitar la resistencia contra el agresor sionista. Mientras teatraliza constantemente la ruptura con la política exterior del gobierno de Aznar y con la guerra estadounidense *contra el terror*, el gobierno español ha facilitado el paso de vuelos de la CIA por territorio español, ha seguido colaborando con la ocupación de Iraq y se ha comprometido crecientemente con la ocupación de Afganistán, incrementando la presencia militar española y su responsabilidad en misiones bélicas. Mientras el presidente del gobierno abandonaba la Alianza de Civilizaciones, el Parlamento español aprobaba eliminar el límite de presencia de tropas españolas en el exterior. Los tres mil soldados que marcaban el tope han sido ya superados con la misión española en las aguas del Índico, para defender los intereses pesqueros de las multinacionales españolas en las costas de Somalia.

La última misión del Ejército español fue aprobada en marzo de 2011 por el Congreso de los Diputados: unos quinientos militares se incorporaban a la intervención de la OTAN en Libia. La nueva guerra de Occidente nada tenía que ver, evidentemente, con razones humanitarias. El dictador, asesinado brutalmente en octubre de 2011, era aliado y brazo ejecutor, hasta ayer mismo, de la política migratoria de la UE en el norte de África, consistente en detener, encarcelar o abandonar en el desierto a miles de refugiados políticos que transitaban por Libia hacia Europa.⁵ De hecho, la última cumbre entre la Unión Europea y África, que el II

⁵ Ver GABRIELE DEL GRANDE (2009): *Mamadú va a morir. El exterminio de inmigrantes en el Mediterráneo* y VV.AA. (2008): *Frontera Sur. Políticas de gestión y externalización de la inmigración en Europa*.

Plan África se comprometía a impulsar, se había celebrado en Trípoli el 29 y 30 de noviembre de 2010. Carme Chacón, ministra de Defensa, anunciaba apresuradamente la retirada de las tropas españolas tras el linchamiento y ejecución de Gadafi.

Seguridad frente a los pobres

Al mismo ritmo que aumenta el porcentaje de petróleo importado por Estados Unidos del continente africano, se extienden, al parecer, las células *yihadistas* y el fundamentalismo islámico –nunca se sabe si justo antes o justo después de que el ejército *yanqui*, a su vez, se despliegue por buena parte de África–. Los planes económicos impulsados por Washington no se reducen al aprovisionamiento energético: la aprobación hace ya más de diez años de la Ley de Crecimiento y Oportunidad Africana (AGOA por sus siglas en inglés) por el Congreso norteamericano abrió un período en el que las tasas de beneficio de las multinacionales han sido más elevadas en territorio africano que en ningún otro lugar del planeta. Las enormes compras de tierra por parte de corporaciones multinacionales, fomentadas y facilitadas por el Banco Mundial, para producción alimentaria, aprovisionamiento estratégico de agua, producción de agrocombustibles y extensión de la industria biotecnológica, son un ejemplo de que el negocio no se reduce al petróleo, el gas, los diamantes o el coltán. Los desplazamientos forzados de población campesina y ganadera –tanto sedentaria como nómada–, consecuencia de la mercantilización de millones y millones de hectáreas, provocan movimientos migratorios internos a una escala infinitamente mayor que los que se producen desde África hacia Europa.

De todos modos, mientras los desplazamientos de población consecuencia de las políticas de modernización y desarrollo se daban en el interior de las *periferias*, estas migraciones forzadas no se veían como una amenaza para los países capitalistas avanzados. Millones de refugiados, hambrunas y guerras no eran más

que –en el mejor de los casos– encabezamientos del telediario para llamar a una caridad en forma de ayudas de emergencia y humanitarias, convertidas a su vez en mecanismos de penetración económica en los territorios afectados. Inundar los mercados locales con ayuda alimentaria para terminar conquistando esos mercados y haciendo inviable la producción local es una de esas estrategias de penetración comercial.

Sin embargo, dado que una parte de los movimientos migratorios acaba, efectivamente, en la Unión Europea –y que estos son amplificados mediante el discurso de la amenaza de la invasión–, las políticas de desarrollo pasan a ocupar un nuevo papel estratégico: de los llamamientos moralizantes a ayudar a los pobres, se pasa a definir el desarrollo de las periferias como política preventiva para garantizar la seguridad de los propios países europeos.

Así, en el I Plan África (2006-2008) el gobierno español no dudaba en presentar sus políticas de lucha contra la pobreza como políticas preventivas para impedir la proliferación de ideologías extremistas, la aparición de grupos terroristas y el tráfico ilícito de personas. El II Plan África (2009-2012) abunda en estos planteamientos. La cita que utiliza para introducir el asunto no tiene desperdicio. El ex-Secretario General de la ONU, Kofi Annan, afirma: «no tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin desarrollo y no tendremos ni seguridad ni desarrollo si no se respetan los derechos humanos; a menos que se promuevan todas estas causas ninguna de ellas podrá triunfar».⁶

Dicho esto, el Plan pasa a justificar la cruzada securitaria española en tres importantes regiones del continente, vinculadas a la extracción de recursos petrolíferos, pesqueros y turísticos. Ya hemos señalado que el I Plan África caracterizaba el Golfo de Guinea como región estratégica para garantizar la seguridad energéti-

⁶Citado en MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN (2009): *Plan África 2009-2012*, p. 22.

ca de España y los intereses de las empresas españolas de hidrocarburos. El II Plan sigue apuntando a la región como uno de los principales objetivos:

(...) en el Delta del río Níger en Nigeria se mantienen los ataques periódicos de la insurgencia por el control sobre la tierra y los recursos energéticos. En el Golfo de Guinea actúan también fuerzas violentas que dificultan la seguridad en la región.⁷

En segundo lugar, el Plan África 2009-2012 advierte de los peligros que nos acechan en los países de África Occidental, en los que la penetración española –firma de acuerdos económicos para garantizar la seguridad de las inversiones y la repatriación de los beneficios, apertura de oficinas comerciales, nuevos consulados, etc.– ha ido de la mano de la lucha contra la inmigración ilegal:

En África Occidental, factores como la amenaza terrorista y el tráfico ilícito de personas, de armas y de drogas por la región y hacia Europa, comprometen también la paz y la seguridad. El conflicto entre poblaciones tuareg y los gobiernos de Malí y Níger, así como el aumento de la criminalidad, los tráficos ilícitos –y su vinculación a la migración clandestina–, y la amenaza de la implantación de células terroristas, agravada por la creación de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), exigen una política preventiva y multidimensional.⁸

Vemos aquí claramente expuesta la vinculación entre migraciones, delincuencia organizada y terrorismo. La insistencia con que los gobiernos europeos han profetizado la aparición de grupos terroristas en la zona es, cuanto menos, sospechosa. De tanto

⁷ *Ibid.*, p. 23.

⁸ *Ibid.*, p. 23.

afirmar que la pobreza era caldo de cultivo para la insurgencia –y de tanto profundizar dicha pobreza mediante el negocio del ex-polio–, la profecía se ha terminado cumpliendo, y rápidamente los medios de comunicación se han encargado de multiplicar su dimensión, convirtiendo algunos episodios aislados en una poderosa amenaza. ¿Cuál será el papel de los servicios secretos europeos en esta trama?⁹

En tercer lugar, el II Plan África expone con rotundidad cuál es el concepto de seguridad manejado por el gobierno español: no es, desde luego, la seguridad alimentaria de los pueblos africanos, que ven cómo los grandes barcos europeos –«son como ciudades tan grandes como nuestro barrio... y a esos no les pedimos papeles»– esquilman sus caladeros, sino la seguridad de los beneficios de quienes les explian:

La inestabilidad en Somalia ha favorecido la proliferación de actos de piratería marítima en la zona. Los secuestros de navíos de diversas nacionalidades en el Golfo de Adén y en el Océano Índico, entre ellos el pesquero español «Playa de Bakio» en abril de 2008, han aumentado en los últimos meses, amenazando la propia subsistencia de esa ruta marítima comercial al haberse convertido en una de las más peligrosas del mundo. La comunidad internacional, y en especial los organismos más directamente implicados como la Organización Marítima Internacional, tratan de buscar medidas urgentes y eficaces que permitan preservar la seguridad marítima en la zona. Buena prueba de ello, es el lanzamiento de la operación «Atalanta» a finales de 2008, primera operación naval de la UE, que se suma a la fuerza multinacional que desde agosto de ese mismo año trataba de asegurar a los buques del Programa Mundial de Alimentos un pasillo de seguridad en la zona.¹⁰

⁹ Ver SAMUEL (2010): «¿Qué está pasando en el Sahel?».

¹⁰ MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN (2009): *op. cit.*, pp. 22-23.

Hemos señalado ya en otros textos¹¹ cómo se han venido entrelazando de forma cada vez más intensa las políticas de ayuda al desarrollo con aquellas encaminadas a la lucha contra la inmigración ilegal y contra el terrorismo. La supuesta amenaza de invasión de Europa, y de España en particular, por hordas de africanos –que, además de pobres, son probablemente fundamentalistas, extremistas y, por qué no, potenciales terroristas– sirve de excusa perfecta para legitimar los planes del gobierno español de penetración económica, política y militar en continente africano. Ciertamente, España ha recibido importantes flujos migratorios en la última década; de hecho, en términos relativos, es decir, poniendo en relación el tamaño de esos flujos con el de la población absoluta, ha sido el país que más inmigración ha recibido en este período. Solamente Estados Unidos supera las cifras absolutas españolas. Pero la llamada *frontera sur* no ha sido la principal vía de entrada, y lo ha sido menos aún el cayuco para llegar a las costas españolas. Sin embargo, la construcción política de esta amenaza ha sido de gran apoyo para justificar la presencia policial y militar española en el continente africano, así como la extensión de redes económicas y comerciales destinadas a hacerse con nuevos mercados:

«la defensa y la promoción de los intereses de la empresa española en África son especialmente importantes en un contexto de crisis económica internacional y de creciente competencia de otros actores en el continente, y ha de compatibilizarse con el desarrollo de las economías locales, en línea con los compromisos adquiridos

¹¹ Ver EDUARDO ROMERO (2008): «El Plan África, la política migratoria española de “nueva generación” y la guerra contra los pobres» en VV.AA.: *Frontera Sur. Nuevas políticas de gestión y externalización del control de la inmigración en Europa* y EDUARDO ROMERO (2006): *Quién invade a quién. El Plan África y la inmigración*.

por la Administración española sobre coherencia de políticas para el desarrollo.»¹²

Resulta esclarecedora la comparación de documentos como el Plan África con aquellos más directamente dirigidos a los empresarios españoles. En el Informe de la Oficina Económica y Comercial de España en Dakar, el interés del Plan África por fomentar las empresas pesqueras mixtas, formadas conjuntamente por capital español y senegalés, se transmuta en una estrategia empresarial para evitar la dependencia de los convenios pesqueros entre Senegal y España o entre Senegal y la UE. La participación de capital senegalés blindará a estas empresas ante la posibilidad de la no renovación de los convenios. Los llamamientos de este documento oficial a que los empresarios estudien las oportunidades de negocio en el sector agrícola, bien mediante la producción de *jatropha* para la elaboración de agrocombustibles, o bien para impulsar un modelo agroindustrial inspirado en la experiencia de Murcia o Almería, son también reveladores.

El II Plan África ha venido acompañado por la aprobación, en abril de 2009, del Plan África de Exportación de Infraestructuras, que recibió en ese momento una línea de financiación de setenta millones de euros con cargo a los créditos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo vinculados a la compra de mercancías españolas). La construcción de grandes infraestructuras, como hemos señalado en el capítulo anterior, ha sido uno de los grandes mitos del discurso del desarrollo: una de las razones más importantes del atraso de los países pobres –afirma este discurso– es la incapacidad de los Estados para dotarse de unas adecuadas infraestructuras de transporte, energéticas, etc. Así, ya durante el período colonial el trabajo forzado garantizó uno de los principales objeti-

¹² MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN (2009): *cit.*, pp. 53.

vos de la colonización: la extracción y transporte de las materias primas que las metrópolis succionaban del continente africano.

La ayuda al desarrollo de la etapa neocolonial se ha dirigido en una proporción muy importante a este terreno. El Plan del gobierno español, aprobado en plena crisis económica, no oculta sus objetivos: fomentar la internacionalización de las empresas españolas, impulsar la actividad empresarial y aprovechar las oportunidades de negocio en sectores como el transporte, la energía (electrificación rural, energías renovables, etcétera) y el medio ambiente (por ejemplo, depuradoras, potabilizadoras, etc.).

«Nuestro interés es recuperar el tiempo perdido para las empresas españolas en África», señalaba el vicepresidente ejecutivo del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), Ángel Martín Acebes. El Plan establece una lista de doce países para su aplicación, pero han sido Ghana, Senegal, Camerún y Costa de Marfil los que han concentrado la inversión. Ghana, mejor país de África Occidental para hacer negocios según el Banco Mundial, ha atraído, por ejemplo, a una expedición de diecisiete empresas, organizada por la Cámara de Comercio de Madrid y encabezada por Iberdrola. En un artículo titulado «África nos espera», en la revista *El exportador*, del Instituto de Comercio Exterior español, Enrique Feás, subdirector general de Política Comercial con Países Mediterráneos, África y Oriente Medio del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, sintetiza la orientación de esta política:

«¿Por qué financiamos? Para generar oportunidades de negocio, esperando que estas sean aprovechadas por las empresas españolas. ¿Cómo favorecemos que ese sea el resultado final? Seleccionando mucho el tipo de sectores y proyectos en los que somos particularmente competitivos».

La puesta en escena de este nuevo desembarco en el continente africano ha sido insuperable: el Ministro de Asuntos Exteriores, por aquel entonces Miguel Ángel Moratinos, presentó el II

Plan África el 25 de mayo de 2009, «Día de África», acompañado del embajador senegalés, del presidente de la Coordinadora de ONGs, del Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 2008, Pedro Alonso, y del sindicato Comisiones Obreras, que celebró su puesta en marcha.

La política migratoria en la frontera sur

Que la principal justificación de la política africana española –la lucha contra la inmigración ilegal– haya sido sobre todo una cortina de humo tras la que se ocultaban los intereses económicos y comerciales en el continente, una especie de palanca para extender los tentáculos de la presencia militar, diplomática, económica y cultural del Estado español en el África subsahariana, no significa que el control de los flujos migratorios no fuera también un objetivo *real*. Sirva como ejemplo la comparecencia anual del entonces Vicepresidente del Gobierno y Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para relatar los éxitos de la lucha contra la inmigración ilegal. En enero de 2011 Rubalcaba se presentó ante los medios de comunicación especialmente satisfecho de la eficacia de la policía fronteriza –que ha aumentado sus efectivos en un sesenta por ciento en los últimos siete años, hasta llegar a más de 16.000 agentes–. Efectivamente, las cifras que ofrece el Ministerio del Interior para el año 2010 muestran un descenso de la llegada de inmigrantes a Canarias de más del noventa por ciento respecto a 2009 y de más del 99 por ciento respecto a 2006. De treinta y un mil llegadas se pasa, en cinco años, a menos de doscientas. A pesar de que el número de personas que llegaron a la Península y Baleares en embarcaciones *clandestinas* –siempre según datos del Ministerio del Interior– no ha disminuido tan espectacularmente, el hecho es que en el año 2010 las llegadas son menos del diez por ciento que cuatro años antes.

Para lograr estos objetivos el Ministerio del Interior se ha hecho además con la gestión de una parte de la ayuda al desarrollo:

un reciente informe –que estudia esta cuestión durante el período de vigencia del primer Plan África– calcula que más del cinco por ciento de la ayuda bilateral del gobierno español hacia África Occidental persigue objetivos de control fronterizo: cinco millones y medio de euros fueron destinados directamente a cooperación policial gestionada por el Ministerio del Interior; Mauritania recibió 10,4 millones de euros para obras en el puerto de Nouadhibou, lugar estratégico tanto por ser uno de los puntos de salida de inmigrantes hacia Canarias como por los intereses pesqueros de las empresas españolas en la zona; también en Nouadhibou se financió el ya mencionado centro de detención de inmigrantes, así como las repatriaciones desde el mismo hacia Senegal; España pagó también sistemas de control y de vigilancia fronteriza en Cabo Verde y en Ghana.¹³

Aunque no se puede negar la efectividad de esta política de externalización de fronteras y del propio sistema de control y represión del Estado español –el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) tiene previsto llegar en 2011 a iPontevedra y Tarragona! y en 2012 a iBarcelona, Girona y A Coruña!–, establecer una relación de causa-efecto entre sistemas de vigilancia y descenso drástico en la llegada de inmigrantes es un auténtico disparate. Los miles de inmigrantes tunecinos llegados a la isla de Lampedusa durante la guerra en Libia –a pesar de que Italia se ha caracterizado por su brutalidad en la frontera exterior y por sus acuerdos para externalizar los controles a sus vecinos del otro lado del Mediterráneo– o la concentración de las entradas clandestinas por la frontera entre Turquía y Grecia en 2010, manifiestan la influencia de procesos sociopolíticos, más o menos coyunturales, en la configuración de las rutas migratorias y en el origen de las personas migrantes, así como la permanente capacidad de los aspirantes a

¹³NEREA AZKONA (2011): *Políticas de control migratorio y de cooperación al desarrollo entre España y África Occidental durante la ejecución del primer Plan África*, pp. 53-56.

llegar a Europa de encontrar los puntos más débiles del dispositivo fronterizo.¹⁴ Las cifras del Ministerio del Interior no recogen, por cierto, –pues ese ya no es *su problema*– el número de personas que han perdido la vida en un trayecto cada vez más peligroso precisamente para salvar los obstáculos impuestos por el *salvamento marítimo*.

Pero el análisis de la política migratoria en la frontera sur *en sentido estricto*, es decir, en cuanto política de *gestión de los flujos migratorios*, exige responder a la desproporción entre los medios represivos al alcance de los Estados y la dimensión cuantitativa de la migración clandestina por dicha frontera. En los últimos diez años han llegado a Canarias, según los propios datos del Ministerio del Interior, 92.288 inmigrantes, y han sido en total 163.396 las personas llegadas al Estado español clandestinamente por medio de embarcaciones. En ese mismo período de diez años, la población inmigrante se multiplicó casi por seis, pasando de apenas un millón de personas en el año 2000 a casi seis millones en la actualidad. En esta misma década, se produjeron regularizaciones extraordinarias por las que aproximadamente un millón de personas accedió a los papeles, mecanismo al que se ha recurrido en varias ocasiones para modular el tamaño de la oferta de trabajo legal y clandestina. Esta última ha sido a lo largo de toda la década de, al menos, cientos de miles de personas, y seguramente de más de un millón en diversos períodos. Por tanto, la especial atención puesta en impedir la entrada por la frontera sur –al margen, insistimos, de las conexiones entre lucha contra la inmigración ilegal e intereses económicos y geoestratégicos en África– tiene que ver, por una parte, con la intención europea de poner freno al asilo

¹⁴En los primeros veinte días de octubre de 2011 han llegado a las costas andaluzas más de quinientas personas en embarcaciones clandestinas procedentes de Marruecos. También han aumentado significativamente en este mes las llegadas a Ceuta y Melilla.

político, no solamente mediante la denegación mayoritaria de las solicitudes, sino mediante un mecanismo más efectivo aún: impedir que las personas que cumplan el perfil de refugiadas lleguen jamás a pisar suelo europeo. Por otra parte, y dado que el Estado español ha promovido la llegada de millones de inmigrantes para alimentar un mercado ávido de fuerza de trabajo barata y servil, se pueden interpretar las especiales dificultades de acceso a través de la frontera sur como una suerte de mecanismo selectivo por el cual el capital español valoraba más las cualidades –la *empleabilidad*– y la capacidad de *integración* de quienes, por ejemplo, ya hablaban castellano y/o compartían *nuestra religión y costumbres*.

La Embajada estadounidense ya advirtió hace tiempo de que «la alta inmigración, legal como ilegal, desde el Norte de África (Marruecos, Túnez y Argelia), así como de Pakistán y Bangladesh» ha convertido Catalunya en «el mayor centro mediterráneo del *yihadismo*».

Del sur, por tanto, viene un especial peligro: como diría Aznar, *los moros*, a (re)conquistarnos.